

carlos arbelos  
alfredo roca

RR { AP. de Correos 31.087  
Barcelona - España

**ARGENTINA**

**PROCESO A  
LA VIOLENCIA**



Círculo de  
Investigación  
Social  
Para  
Latinoamérica

centro argentino de  
estudios políticos

Esta publicación se acoge a las Convenciones Internacional y Panamericana sobre derechos de autor. Copyright 1983 por CISPLA. Los materiales publicados pueden reproducirse citando la fuente.



Correspondencia a:

**CISPLA**

centro argentino de  
estudios políticos

MRF  
Apartado de Correos 1325  
Valencia/España

AMR  
Apartado de Correos 31087  
Barcelona/España

## PRESENTACION

América del Sur avanza lenta pero inexorablemente hacia las derrotas de las férreas dictaduras militares instauradas en varios de sus países en la década de los setenta. Bolivia y Perú ya tienen gobiernos civiles y democráticos, en Brasil y Argentina el proceso de elecciones parece irreversible, las heroicas luchas del pueblo chileno van arrinconando día a día a uno de los payasos más sangrientos que conociera la humanidad y finalmente la digna resistencia de los uruguayos va desmantelando una a una las trampas y argucias que para perpetuarse en el poder traman los uniformados orientales.

No se nos escapa que el proceso de todos y de cada uno de los países del cono sur tienen sus propias características, sus propias leyes y circunstancias, pero todos tienen algo en común: gobiernos militares de facto que han reprimido a sus pueblos con una violencia extrema y que han entregado de manera total y descarada los patrimonios nacionales a los centros del poder monopolistas internacionales.

La conciencia común de la necesidad de la unión e integración que tienen los pueblos de Iberoamérica ha quedado evidenciada durante la guerra de las Malvinas, pero esos pueblos también saben que la integración sólo será posible y efectiva en regímenes de libertad y justicia. Es históricamente reconocida la influencia económica,

política y cultural de Argentina en el Cono Sur. Si este país lograra restablecer y consolidar un sistema democrático, si lograra un nivel de estabilidad política y a su vez revertir el enfermizo estado de su economía, es indudable que esto repercutiría positivamente en el conjunto de países de Sudamérica.

Argentina se encuentra hoy ante un desafío histórico pero nuestra confianza en sus gentes nos hace pensar que los múltiples obstáculos con los que se encontrará su próximo gobierno constitucional serán superados.

El CISPLA y el CAEP consideran que el análisis y la comprensión de las causas que desataron el clima de violencia, intolerancia y enfrentamientos en la sociedad argentina es fundamental para que durante el próximo gobierno democrático los argentinos logren una convivencia en paz y en libertad. De esta manera ese gran país podrá ocupar el lugar que le corresponde en el concierto de las naciones.

Pensamos que este análisis debe hacerse con gran profundidad y cada una de las causas deben ser objeto de un debate lo más amplio y extensivo posible. Por eso el CISPLA y el CAEP han querido dar este primer paso en común, publicando este trabajo de Alfredo Roca y Carlos Arbelos. Nadie mejor que ellos para encarar esta tarea. Ya que estos dos hombres han vivido intensamente los últimos 25 años de la convulsionada realidad argentina. Han estado inmersos y han sido protagonistas del clima de violencia que imperó en su país y lo que es más importante han sabido extraer de sus experiencias una valoración crítica.

Arbelos y Roca iniciaron su militancia durante el período que se ha dado en llamar la "resistencia peronista" y han participado en todas las formas de lucha que se fue dando el pueblo. Son unos de los precursores en impulsar la lucha armada contra las sucesivas dictaduras militares. En 1973, cuando el peronismo triunfó en las elecciones por amplia mayoría —en el primer acto electoral libre desde 1952— ellos son de los primeros en plantear la necesidad de abandonar las armas empuñadas contra la dictadura para volcar los esfuerzos en la consolidación de la democracia.

Siendo funcionarios del gobierno peronista, se ven enfrentados a los reaccionarios sectores encabezados por Lopez Rega lo que les vale ser amenazados por la "Triple A". A la muerte de Perón abandonan sus cargos en el Ayuntamiento de Buenos Aires y deciden poner distancia para no verse envueltos en la demencial espiral de violencia que volvía a desatarse. Esta vez se enfrentaban una izquierda tremendista que no supo diferenciar entre el gobierno de María Estela Martínez de Perón y una dictadura militar con grupos parapoliciales y paramilitares, que amparados, apoyados e impulsados por sectores del gobierno emprendieron el asesinato y el rapiñaje a mansalva contra todo lo que fuera disidencia u oposición.

Es así como un bagaje de críticas al gobierno de Isabel Perón y a la teoría y práctica de la lucha armada, llegan a España. Aún cuando mantienen su identidad política peronista, sus nueve años de exilio los han llevado a distanciarse de las luchas internas por el poder dentro del peronismo, lo que contribuye a que tengan una visión más totalizadora y objetiva.

Setiembre, 1983

- 1.- A MODO DE PROLOGO
- 2.- ANTECEDENTES  
EL PRIMER GOLPE MILITAR
- 3.- EL PERONISMO  
DEMOCRACIA CON JUSTICIA SOCIAL
- 4.- LA SUCESION DE GOLPES MILITARES
- 5.- LA VUELTA DE PERON  
UN BREVE INTERREGNO DEMOCRATICO
- 6.- EL GOLPE DESPIADADO

## 1. A modo de prólogo

En Argentina, el próximo presidente constitucional que surja en las elecciones del 30 de octubre, tendrá que hacerse cargo de un país, al que las sucesivas dictaduras que han tenido la responsabilidad de gobernar durante los últimos siete años, han sumergido en una crisis sin precedentes en su historia.

Una vez más, los militares se ven obligados a devolver la administración del Estado a las fuerzas civiles y ésta tiene que ser la definitiva. Nunca más las fuerzas armadas deben abandonar sus cuarteles por apetencias políticas. Se ha de poner fin de una vez y para siempre al enloquecido círculo vicioso de golpes de estado en que se encuentra inmersa la sociedad argentina.

La enorme responsabilidad de restablecer y consolidar la democracia no solamente le corresponderá al próximo gobierno electo sino que también debe recaer en todas las fuerzas políticas y sociales que tengan como objetivo vivir en un estado de derecho.

Resulta imprescindible que la civilidad llegue a un amplio y profundo acuerdo, para garantizar la estabilidad de las instituciones democráticas y al compromiso de abandonar las prácticas desestabilizadoras que han sido paso previo y caldo de cultivo de los golpes de estado.

El reencuentro de los argentinos con la democracia no será fácil. Por la falta de práctica casi se ha olvidado lo que es una convivencia democrática. Es por ello prioritario el introducir hábitos democráticos en la sociedad y que los argentinos aprendamos a ser tolerantes y a respetar al adversario político. La dialéctica de los puños y las pistolas ha de ser reemplazada por la dialéctica de la razón. La fuerza de las "patotas" tiene que ser reemplazada por la fuerza de los argumentos. Mayorías y minorías deben aprender a convivir, ocupando el lugar que les corresponda como gobierno y oposición respectivamente. Teniendo en claro que ante la incapacidad, errores y/o desaciertos del ejecutivo, por más graves que estos fueran, el camino a seguir no es aquel que llega a la puerta de los cuarteles —tantas veces recorrido en el pasado— sino el ancho camino de la Constitución Nacional.

Esta reconciliación nacional, imprescindible para encaminar la reconstrucción del país, no se puede llevar a cabo sin JUSTICIA.

Por eso, la reconciliación entre los argentinos no debe ni puede significar el "borrón y cuenta nueva", el "manto del olvido" sino todo lo contrario.

Las fuerzas armadas y sus mandos desde 1976 deben rendir cuenta de todo lo actuado especialmente en lo referente a la derrota en las Malvinas, el endeudamiento externo, la acción represiva y los actos ilegales y de corrupción. Una vez instaurada la legitimidad constitucional en los tres poderes, los jueces que juren sobre la Constitución Nacional y no sobre los "Estatutos Militares", deben ser los encargados de investigar todos los desmanes cometidos por la dictadura. No pueden quedar impunes los asesinatos, las torturas, los enriquecimientos ilícitos, la entrega descarada de la economía nacional.

Todo esto debe hacerse sin ánimo de venganza ni de revancha pero sí con un ánimo de justicia y con la conciencia clara de que la necesaria reconciliación nacional, sólo será posible en la medida en que los argentinos veamos nítidamente que los gobiernos militares no solamente no solucionan los problemas del país sino que lo llevan al borde de la disolución nacional acentuando la dependencia hasta límites inconcebibles.

Se debe tener muy claro, que las fuerzas armadas tienen que dejar de ser el partido militar y deben estar organizadas, preparadas y capacitadas para defender la soberanía nacional y la integridad territorial —cosa que han demostrado no saber hacer— y no para intentar gobernar reprimiendo a sus conciudadanos. Quién debe gobernar es el pueblo a través de sus representantes libremente elegidos. Y al pueblo y a sus representantes es a quienes los ejércitos deben lealtad y obediencia.

Que la sociedad entera conozca los desmanes cometidos en estos últimos siete años, es la única garantía de que no se vuelvan a repetir y que los argentinos podamos convivir en paz, libertad y con dignidad, en un régimen democrático que tenga como única "dictadura" a la Constitución Nacional.

Los golpes militares de 1930, 1955 y 1976, pero muy especialmente el de 1955 demostraron que la minoría oligárquica que quería un Estado destinado a servir sus propios intereses sectoriales y no los de la nación, no estaba dispuesta a aceptar la apertura del poder político a las mayorías, que el peronismo había incorporado definitivamente. Esto convirtió al peronismo en un "hecho

maldito". Por eso el principal objetivo de todos los pronunciamientos militares a partir de 1955, tuvieron como prioridad silenciar a las mayorías populares y borrar de la faz de la tierra su expresión política: el peronismo.

Esta proscripción compulsiva de las mayorías, es el origen de la violencia política argentina. La clandestinidad a que fueron obligadas las masas, durante muchos años justificó y legitimó la violencia popular.

En 1973 al ser elegido por amplia mayoría el gobierno peronista que sintetizaba las aspiraciones nacionales, logrando una reivindicación tan sentida por los argentinos como fue devolver a Juan Perón el gobierno de la Nación, hubieron algunos grupos que no entendieron que los actos de violencia —hasta entonces expresión de la voluntad popular— pasaban a ser hechos provocadores al servicio de intereses antinacionales. Estos grupos no quisieron o no pudieron entender que a partir del momento en que se expresó libremente la voluntad popular no tenía sentido ni justificación alguna continuar con la práctica de la violencia.

Menos sentido aún tenía responder a la violencia de estos grupos desfasados, con la violencia ilegal y clandestina, alentada y ejercida desde sectores del gobierno.

Cuando se restituya la soberanía popular sin la cual no hay justicia posible el gobierno libremente elegido por la voluntad mayoritaria del pueblo va a tener que enfrentar decididamente el problema de la violencia. Tanto si ésta proviene de grupos elitistas cuyo infantilismo los lleve a confundir una dictadura militar con un gobierno electo o de bandas parapoliciales que presumiblemente no se resignarán a perder la impunidad que les otorgó "el proceso". Cualquier futura violencia, del terrorismo o de grupos golpistas antidemocráticos debe obtener una respuesta contundente y efectiva del Estado, pero siempre dentro del espíritu de la Constitución Nacional y de lo que dispone el ordenamiento jurídico argentino. La experiencia de nuestro país nos indica claramente que cuando la violencia de grupos minoritarios se responde con la violencia ilegal del Estado —utilizando los mismos métodos clandestinos y llevando adelante una "guerra sucia"— se cae inevitablemente en el "Terrorismo de Estado". Esto es caer en la represión indiscriminada, en la tortura salvaje y despiadada, en los ajustes de cuentas de tipo delictivo, en la delación malinten-

cionada, en la política de las desapariciones forzosas, en definitiva, en la barbarie. Para más datos recordar la "Triple A" y la "guerra contra la subversión".

El peronismo desde que asumió el gobierno en 1946 llevó adelante una política que transformó profundamente en lo económico y lo social la sociedad argentina. Asimismo fue la herramienta que logró la unidad y organización de la clase trabajadora que por primera vez en la historia del país pudo intervenir en los asuntos del estado. De esta manera se sentaron las bases de la central sindical más poderosa de América Latina dando un contenido nacional a sus luchas y reivindicaciones independientemente de los intereses de cualquier potencia imperial de nuestros días.

El peronismo desde la oposición siempre constituyó el principal obstáculo para todos los planes antinacionales que se fueron ensayando. Siempre fue el enemigo fundamental de los personeros de la dependencia.

Con el peronismo por primera vez las grandes mayorías populares, el pueblo trabajador, se identificaron con un gobierno que los defendía, que les daba participación y los ponía de pie frente a los poderosos y la injusticia. Precisamente uno de los grandes logros de Perón es haber incorporado definitivamente a la conciencia nacional la noción de justicia social.

Pero si bien no hay duda de que son muchos y grandes los aciertos del peronismo, tampoco debemos ocultar que se han cometido errores. Intolerancia, autoritarismo, abuso de poder, "dedocracia", desviación de la doctrina y falta de respeto a las minorías, son algunos de los defectos que se nos imputan a los peronistas y en la mayoría de los casos no sin razón.

Si el país se encuentra hoy frente a una encrucijada histórica, también en esa misma encrucijada se encuentra el movimiento peronista quien está llamado históricamente a transformar la República Argentina en "una Patria Justa, Libre y Soberana".

Si hemos sabido aprender de los errores del pasado, si estamos convencidos de que lo fundamental es consolidar la democracia y crear un clima de convivencia en paz y libertad para los argentinos y si todo esto se ha hecho carne en la inmensa mayoría de los peronistas (nosotros creemos que sí) entonces el movimiento peronista conducirá con éxito al país a través de esta encrucijada.

Porque con sus innumerables aciertos y a pesar de algunos errores, el peronismo sigue siendo la fuerza política mayoritaria que cuenta con el apoyo de amplios sectores sociales comprometidos con los intereses de la nación y fundamentalmente con la clase trabajadora que es su columna vertebral.

Estamos convencidos que solamente el movimiento peronista es capaz de llevar adelante la reconstrucción nacional y la reconciliación de los argentinos.

El peronismo, unido, moderno y democráticamente organizado tiene que terminar la revolución iniciada en 1946 por el general Perón. Una revolución en paz y democracia. Una revolución cuyas armas son la libertad y la justicia social.

El peronismo por sus características políticas, su condición social y la naturaleza de su doctrina es la única fuerza capaz de estructurar una alianza política y un acuerdo social que permita sentar las bases de un proyecto nacional y un programa de gobierno adecuado para la difícil etapa que se iniciará en el momento del traspaso del poder a los civiles argentinos.

## 2. Antecedentes

### El primer golpe militar

Si bien 1955 fue el año que históricamente marcó un hito en la sucesión de golpes de estado y de la violación sistemática de las normas jurídicas y constitucionales que regían la Argentina, no se debe dejar de tener en cuenta los antecedentes de estas violaciones a la normativa de convivencia mayoritaria establecidas a mediados del siglo pasado. En 1930 militares sediciosos inauguran la serie de golpes de estado en contra del poder legalmente constituido. A continuación restablecida una democracia formal, en 1943 nuevamente los militares se alzan en armas usurpando el poder a las fuerzas civiles.

El primero de estos golpes militares —encabezado por el general Uriburu— derrocó al gobierno presidido por Hipólito Yrigoyen, representante de la Unión Cívica Radical quien gobernó desde las primeras elecciones democráticas que se realizaron en nuestro país en 1916. El gobierno radical si bien con grandes contradicciones en su política social y económica —protagonizó gravísimas re-

presiones a campesinos en la Patagonia y a las primeras manifestaciones proletarias, como las de la "Semana Trágica" — llevó adelante una política nacional populista que le hizo perder la confianza de los sectores oligárquicos ligados a la agroexportación en ese entonces y a distanciarse de Gran Bretaña.

El golpe militar que derrocó a este gobierno en setiembre de 1930 significó la toma del poder por parte de los sectores más reaccionarios de la burguesía terrateniente, financiera e industrial estrechamente vinculada a los intereses británicos en el país. El "nuevo orden" mussoliniano pregonado por Uriburu buscó al estilo fascista italiano consolidar el dominio del estado recurriendo a elecciones provinciales. Al perderlas, debe anularlas y finalmente proscribir definitivamente al yrigoyenismo.

Este período se conoce en nuestra historia como la "década infame". Es entonces cuando se abre el camino a la violencia institucional del Estado, cuando matones amparados en las fuerzas represivas del gobierno cometen los primeros asesinatos políticos y cuando se instaura la "sección especial" de la Policía Federal encargada "especialmente" de la represión a obreros, estudiantes y opositores al régimen. De esta época son las primeras menciones a la picana eléctrica en nuestro país. Al represivo sistema establecido y a las consultas electorales fraudulentas conocidas como "fraude patriótico" el joven sindicalismo argentino respondía con huelgas sectoriales y ya grupos minoritarios de inmigrantes europeos de tendencia anarcosindicalista ejercitan algunas formas de violencia.

En este marco de desorden jurídico institucional, el país comenzaba a tener un incipiente desarrollo industrial al mismo tiempo que el estallido de la segunda gran guerra generaba nuevas inquietudes políticas y sociales en los distintos grupos socioeconómicos argentinos. Este conjunto de situación desembocó en el golpe militar de 1943 que protagonizaron jóvenes oficiales del ejército.

No obstante este gobierno, aunque surgido de la ilegalidad es uno de los pocos en nuestra historia que convocó a elecciones libres y sin proscripciones. Desde él se alentó la participación política de todo el pueblo y su organización sindical, hasta ese entonces dispersa y heterogénea.

Del análisis de esta reseña de los primeros pasos po-

líticos en el camino hacia la democracia en nuestro país, surge el germen de todos los hechos posteriores que en los últimos años nos han venido angustiando: golpes militares, fraudes electorales, violencia indiscriminada en las manifestaciones populares, asesinatos políticos, violencia terrorista y una maraña de violaciones a las leyes escritas desde la Constitución de 1853 hasta el Código de Tráfico.

El desamparo de las clases populares —salvo en contados momentos de la historia— ha sido feroz, lo que sin embargo nunca desmoralizó a los viejos y nuevos luchadores demócratas que generación tras generación siguen intentando implantar la justicia social en Argentina.

### 3. El peronismo

#### Democracia con justicia social

En 1930 un grupo de militares sediciosos arrebató el gobierno al radicalismo de Irigoyen y en 1943 un grupo de jóvenes oficiales fervorosamente nacionalistas dieron el segundo golpe militar de la historia argentina. Ante la corrupción generalizada, el fraude descarado en las pseudo elecciones que se realizaban y la desnacionalización acelerada del país en el campo económico, los militares vuelven a hacerse con el gobierno. Pese a las contradicciones entre los protagonistas de este golpe —había un grupo de oficiales admiradores de los fascismos europeos, especialmente del italiano y los sucesivos cambios en la cúpula militar— este fue el único gobierno que surgido de una acción anticonstitucional y de un hecho de violencia, desarrolló no obstante una política social y económica progresista. Mantuvo una política de neutralidad en relación a la segunda guerra mundial y alentó la participación de las mayorías en la política nacional. Como corolario concluyó convocando a un proceso electorario realmente libre y sin proscripciones. Es en el contexto de este golpe que hace su irrupción en la vida política argentina el entonces coronel Perón. Él es el artífice de la política social de ese gobierno que preconizó la necesidad de la organización sindical de los trabajadores para acabar con la era de sumisión de los explotados. A su vez sostenía la necesidad de desarrollar industrialmente el país de forma independiente de los grandes bloques hegemónicos del mundo.

Al agudizarse las contradicciones en el seno de este gobierno militar, Perón es obligado a dimitir de todos los cargos y posteriormente es encarcelado. Es este el último intento de los sectores ultrareaccionarios del país para frenar el proceso de democracia con justicia social que se avecinaba en Argentina al concluir la segunda guerra mundial.

En la detención de Perón está el origen de la jornada del 17 de octubre de 1945 en que las masas protagonizaron su irrupción política por fuera de los cauces jurídicos legales de nuestras normas constitucionales. El hecho, caracterizado como de violencia pacífica, ya que el pueblo que se volcó en las calles para exigir la liberación de Juan Perón no cometió ningún desmán, sólo ocupó las calles del centro de la ciudad y luego la plaza de Mayo exigiendo de viva voz la liberación de quien ya consideraban su líder, planteando no retirarse de allí hasta tanto no se le permitiese hablar con él. El gobierno militar débil y contradictorio, asustado ante la avalancha humana y política que significaba la presencia masiva del pueblo postergado en las calles de la ciudad de Buenos Aires —Era la primera vez que ocurría un hecho de esta naturaleza— liberó al coronel Perón de su encierro, le permitió dialogar desde los balcones de la Casa Rosada con el pueblo y tuvo que establecer la convocatoria a unas elecciones libres para unos meses después.

Podemos decir sin temor a equivocarnos que esa jornada del 17 de octubre fue el primer acto de irrupción popular masiva que no fue reprimido en nuestra historia y que culminó con un éxito rotundo. Por primera vez el pueblo argentino ejerció ante un gobierno ilegítimo su legítimo derecho a peticionar y lo hizo con un estruendoso reclamo que se transformó en un hito histórico para el devenir argentino. Las elecciones de 1946 que, desarrolladas en un clima de absoluta libertad y sin falsos cómputos le dieron el triunfo al frente nacional liderado por Juan Perón y erigieron al peronismo como la nueva forma política de Argentina. Radicales, conservadores, socialistas, comunistas y todo el conjunto de las fuerzas reaccionarias sufrieron la derrota electoral más importante de su historia. En este primer gobierno peronista (1946-1952) se efectiviza una democracia con contenido social. Democracia porque se gobernó dentro de los cá-

nonnes de la legalidad constitucional con respeto por las minorías parlamentarias y extraparlamentarias y con contenido social porque el gobierno además de representar los intereses mayoritarios del país abarcó en la proyección de su política interna a sectores con intereses contrapuestos transformándose el Estado en el fiel de la balanza de dichas contradicciones. En 1949 la Constitución se modificó en el marco de lo que ella misma establecía. Fue modernizada, pues databa de 1853, y se la dotó de los artículos que recogían la política social popular del gobierno incorporándose asimismo los derechos de la mujer, entre ellos el del sufragio, hasta entonces inexistente en el país.

Las detenciones políticas son ínfimas en esta época y salvo las huelgas de los trabajadores del azúcar y ferroviarios por cuestiones reivindicativas, este período puede reconocerse como el de mayores libertades y mayor bienestar económico de nuestro pueblo.

Es a partir de 1952 durante la segunda presidencia de Juan Perón cuando comienzan los problemas con sectores de la oposición. En primer lugar los ligados al Partido Conservador de larga tradición oligárquica y probritánica y posteriormente con elementos de la institución militar, así por ejemplo en 1952 un grupo de militares subversivos intentó un golpe de estado que fue rápidamente controlado por sectores leales al gobierno del mismo ejército. Los militares golpistas fueron detenidos y juzgados de acuerdo a las leyes vigentes. En ningún caso el gobierno peronista recurrió a una represión por fuera de las normas constitucionales.

Sin embargo, estos sediciosos fueron la punta de un iceberg que iría apareciendo a medida que la tensión social crecía entre diferentes sectores del frente nacional que representaba el peronismo, a la vez que se agudizaban las contradicciones con las potencias hegemónicas de la segunda guerra mundial: Estados Unidos y Gran Bretaña. Estos dos países alentaban la oposición al régimen peronista pues éste cuestionaba sus intereses en el país. Les servía de cabeza de puente, la oligarquía nativa vinculada a la agro exportación y sectores de las fuerzas armadas ligados a estos intereses reaccionarios. Son estos últimos quienes manejarán las espadas, teniendo como masa de maniobras a la clase media instrumentada por el clero católico disconforme con ciertas medidas

del gobierno: separación de la iglesia del Estado, promoción del divorcio. Esta situación que originó una tensión social importante tampoco fue contestada por el Estado con medidas extralegales. Únicamente se recurrió a imponer el "estado de excepción" al recrudecer los rumores de nueva asonada militar. Si bien numerosos políticos de la oposición conspiraron abiertamente contra el gobierno, en aquel período el Poder Ejecutivo recurrió siempre al diálogo buscando términos de unidad y por cierto que el poder judicial persiguió cuanto delito se hubo cometido en contra del gobierno legalmente establecido.

Es recién en 1955 cuando toda esta situación concluyó en un golpe militar sanginario y cruento. Un primer intento del mismo en junio de ese año fue protagonizado por sectores de la marina de guerra que no vacilaron en bombardear y ametrallar a civiles indefensos desde aviones militares. En esa oportunidad, la respuesta del Poder Ejecutivo fue una vez más la búsqueda del diálogo, en cambio el pueblo optó por una respuesta violenta a los golpistas, la noche del 16 de junio de 1955, grupos masivos de enfervorizados defensores del régimen democrático atacaron los centros sociales, políticos y religiosos de las fuerzas que proponían la subversión. Estas acciones fueron criticadas por el gobierno ya que no sólo no eran el camino para frenar la sedición sino que por el contrario la violencia popular servía de justificante a quienes atacaban el régimen constitucional. Si bien el golpe de junio pudo ser controlado por los sectores de las fuerzas armadas que permanecían leales al gobierno democrático y a la Constitución en setiembre del mismo año eso fue imposible. La marina británica abasteció a la destartada marina argentina que inició el movimiento sedicioso mientras armas USA contrabandeadas por las fronteras limítrofes abastecieron a civiles que conformando los llamados "comandos civiles" apoyaron a los militares de los ejércitos de tierra y aire sublevados. Del 16 al 23 de setiembre de 1955 las fuerzas armadas argentinas combatieron entre sí. Los civiles armados por la oposición atacaron al gobierno legalmente constituido mientras que otros civiles que pedían armas para defender al gobierno democrático peronista fueron masacrados por las fuerzas reaccionarias. Cuando el ejército leal comenzó a ser vencido, el general Perón desde el gobier-

no para evitar una guerra civil que causaría gran cantidad de víctimas renunció e inició el camino del exilio. La democracia y la libertad, aunque en nombre de ellas estuvieran actuando los sediciosos, acababa de sufrir el más rudo golpe de la historia de nuestro país. El gobierno que se instaló, si bien no fue el más brutal ya que ese patrimonio le corresponde a la dictadura militar instaurada en 1976, sí que tiene la responsabilidad de asesinatos, torturas, cárceles, represión, persecuciones y exilio hacia los defensores peronistas de la libertad. También les correspondió la responsabilidad histórica de fraudes electorales, sucesivas dictaduras y "dictablandas" más la entrega del patrimonio del país a los Estados Unidos. En definitiva su patrimonio ha sido 18 años de represión, brutalidad y entrega.

#### 4. La sucesión de golpes militares

Entre 1955 y 1973 Argentina conoció ocho presidentes; dos golpes de estado incruentos; dos enfrentamientos armados entre facciones rivales del mismo ejército; una elección anulada; dos consultas electorales en que la fuerza política mayoritaria estuvo proscripta; un levantamiento militar armado con participación de civiles ahogado en sangre; insurrecciones populares masivas; acciones armadas de grupos guerrilleros; en suma todo tipo de acciones de violencia popular y también todo tipo de represiones legales e ilegales. En definitiva fueron 18 años de tremenda conmoción social en nuestro país que marcó a toda una generación en la violencia. No es casual que el fallecido juez federal, Jorge Aguirre, al juzgar delitos cometidos en este período se refiriera a la culpabilidad de los acusados en los siguientes términos: "Sí debo ya que es mi íntima convicción señalar concretamente en esta causa que los episodios que me tocan juzgar —muy graves por cierto— se ven íntimamente ligados a una parte reciente de la historia de nuestro país, profundamente convulsionada donde los hombres que representaban a las instituciones, encabezándolas, no dieron el ejemplo de cordura a sus conciudadanos que era dable esperar. Fuerzas en pugna con encontradas convicciones políticas fueron a la lucha fratricida, es en

este clima de subversión en que se desenvuelve la actividad de los encartados”.

La “Revolución Libertadora” — así se autotituló el régimen surgido del golpe militar que derrocó al gobierno peronista en 1955— proscribió de la acción cívica de nuestro país a la fuerza política mayoritaria, persiguió y encarceló a sus dirigentes y en su sinnúmero de atrocidades y abusos de poder llegó a secuestrar y hacer “desaparecer” el cadáver de quien había sido instituida por el parlamento argentino “Jefa Espiritual de la Nación”, la mujer de Juan Perón, Evita.

Este gobierno, primero presidido por el general Lonardi y luego por el general Aramburu a la hora de enfrentarse con un levantamiento armado protagonizado por militares partidarios de volver al régimen anterior y civiles que los apoyaban, no vaciló una vez controlado el conato de insurrección en fusilar a los responsables del mismo, en fusilar también indiscriminadamente y sin juicio previo a civiles acusados de intervenir como tampoco vaciló en asaltar embajadas extranjeras donde algunos participantes habían buscado refugio. Esto supuso para la mayoría del pueblo argentino el inicio de una etapa generalizada de violencia subterránea, señalada por los sabotajes, las huelgas, en definitiva por lo que se conoció como la “resistencia”, época que marca uno de los hitos de violencia más justos de nuestra historia. Dada la tensión social y ante el compromiso de los militares con aquellos sectores políticos civiles que los habían acompañado en la aventura “libertadora”, en 1958 se convocan elecciones generales manteniendo proscripta a la fuerza política mayoritaria: el peronismo.

Celebradas estas elecciones asumió el gobierno Arturo Frondizi, representante de uno de los sectores en que se había desmembrado durante este proceso la Unión Cívica Radical. Testaferro de los más ávidos capitales estadounidenses propuso en alianza con éstos un modelo de desarrollo industrial basado en la dependencia tecnológica de USA. Cuestionado por los intereses oligárquicos agroexportadores y acosado por las masas populares peronistas educadas en un profundo sentimiento antiimperialista realizó una tímida apertura hacia el peronismo. Ejercitó hacia éste una doble política, por un lado desarrolló una cruel represión hacia todas las expresiones de rebeldía peronista —incluso bajo su mandato era deli-

to mencionar el nombre de Perón— y por otro lado inició una política de acercamiento hacia sectores sindicales del peronismo con el objeto de intentar quebrar el liderato de Perón. En este juego que no fue del agrado de las fuerzas armadas tuvo que soportar más de una docena de planteamientos castrenses. Finalmente se vio obligado a convocar elecciones provinciales incluyendo al peronismo para seguir con su juego de desmembrarlo. Dichas elecciones celebradas en marzo de 1962 otorgaron en las principales provincias el triunfo de forma inequívoca a los candidatos peronistas. Esto fue intolerable para las fuerzas armadas y los sectores más reaccionarios de la sociedad. Lo que inmediatamente obligó a la anulación de dichas elecciones y al poco tiempo a la destitución del propio Frondizi, quien fue encarcelado por los militares al negarse a renunciar.

La respuesta popular a esta serie de desatinos gubernamentales fue una sucesión de huelgas en las ramas más importantes de la producción y los servicios, lo que constituyó un caldo de cultivo para que grupos de jóvenes se propusieran la lucha armada irregular —al estilo de Cuba o Argelia— para destronar del poder a los militares, ideas que sólo cuajarían años más tarde.

Aunque pudiera parecer lo contrario las fuerzas armadas no constituían un todo homogéneo en este proceso. En dos oportunidades: setiembre de 1962 y abril de 1963 se enfrentaron en dos bandos, los “azules” y los “colorados” (única manera de diferenciarlos según el “New York Times”). En estas luchas hubo un saldo indeterminado de muertos, todos ellos conscriptos no profesionales. De estos enfrentamientos surge triunfante la línea “pacificadora” encabezada por el general Onganía —entonces comandante en jefe de las fuerzas armadas—. Se dicta una amnistía general que libera a los presos peronistas y se convocan nuevas elecciones manteniendo la probada fórmula de proscripción del peronismo.

En esta época de convulsiones se inscribe el primer antecedente de detenidos-desaparecidos. En agosto de 1962 es detenido y torturado el obrero metalúrgico Felipe Vallese por sus vinculaciones con grupos que proyectaban la lucha armada. Muerto en la tortura, la policía hace desaparecer el cadáver de Vallese para no hacerse cargo de los hechos.

Para manifestar su desacuerdo con la nueva convoca-

toria a elecciones con el peronismo proscripto, los peronistas recurren a la fórmula de votar en blanco. Por lo que solamente con el 25 por ciento de los votos es elegido presidente el radical Arturo Illía. Este representaba a las clases medias administrativas y provinciales de nuestro país sin una alternativa de proyecto político coherente para la Nación. Su ilegitimidad fue contestada por la clase trabajadora peronista con un "Plan de Lucha" que en su última etapa desembocó en la ocupación de más del 80 por ciento de los centros de producción del país. Estos métodos de lucha pacíficos de los trabajadores una vez más pusieron de manifiesto hasta qué punto las mayorías estaban siendo marginadas de la política gubernamental en este período.

Debido a esto y a las contradicciones propias de los intereses que representaba, la presidencia del doctor Illía no alcanzó a durar tres años. Ante la perspectiva de que en comicios próximos el gobierno seudo constitucional y seudo democrático legalizara al peronismo, éste fue derrocado por la sola acción de la policía sobre la Casa Rosada. Nadie lo defendió, nadie pidió armas para resistir a los nuevos militares que con el general Onganía a la cabeza volvieron a apoderarse del gobierno. Por supuesto junto a estos se encontraban alineados los sectores sociales más reaccionarios: la oligarquía agroexportadora y los sectores industriales más directamente ligados a los intereses de los Estados Unidos en nuestro país. Una vez más la actividad política fue prohibida en Argentina y los únicos peronistas bien vistos por la dictadura militar fueron aquellos que estuvieron dispuestos a colaborar en la formación de un sindicalismo "apolítico y colaboracionista" desvinculado de Perón y en contra de los intereses propios de los trabajadores.

A diferencia de los golpes militares anteriores cuyas políticas represivas fueron descargadas casi exclusivamente sobre la clase trabajadora y el peronismo, esta dictadura arremetió también contra las clases medias, algunos sectores de la izquierda, y en general contra todas las manifestaciones culturales progresistas que gobiernos anteriores habían respetado en tanto y en cuanto no tuvieran un acusado tinte popular. Entre otras cosas la nueva dictadura militarizó las universidades.

Su política social y económica se sumó a las fracasadas políticas desarrolladas desde 1955 provocando una

gran quiebra económica en los sectores más desposeídos y un empobrecimiento general de la población. Es decir que las consecuencias de las políticas económicas antinacionales vigentes a partir de 1955, comenzaron a hacerse sentir en esta época con toda intensidad. De tal manera que ciertos sectores que diez años antes se solidarizaron con las fuerzas armadas, en este período de recorte de las libertades cívicas se vieron enfrentadas a las mismas. Así nuestro país conoció huelgas prolongadas —como el caso de los trabajadores petroleros (SUPE) y de los cañeros azucareros tucumanos— y gigantescas insurrecciones populares tales como el "Cordobazo" y el "Rosariozo". En ambos casos estas ciudades fueron ocupadas por la población y la policía obligada a abandonar la calle. Solamente la acción de las fuerzas armadas, que no vacilaron en matar civiles hizo posible su recuperación. Sin duda también éstas fueron formas justas de manifestar el legítimo derecho del pueblo, enfrentándose a autoridades ilegítimas, para elegir a sus gobernantes.

Es en este clima de gravísima tensión social que el general Onganía fue sustituido por otro general, tal vez con menos devaneos moralistas que el anterior y más educado en el Pentágono: Marcelo Levingston. Esto sólo fue una "lavada de cara" de la dictadura ante las impresionantes manifestaciones de repudio popular de Córdoba y Rosario. En este contexto se gestaron y desarrollaron diferentes grupos de guerrilleros armados de acción esencialmente urbana que recogieron —ahora sí— las experiencias cubana y argelina transfiriendo a las ciudades las teorías de guerrilla rural.

Estas organizaciones con sus acciones violentas cotidianas coadyuvaban a la imposibilidad de estabilización del régimen militar que prometía quedarse en el gobierno diez años. Si bien su violencia era minoritaria, ésta estaba apoyada y sostenida por importantes reivindicaciones populares tales como la vuelta a la democracia sin proscripciones, lo que generó que la mayoría del pueblo sometido se viera reconocido y compartiera dicha violencia. Estos grupos carecían de un proyecto político propio y alcanzados los grandes objetivos de vuelta a la libertad y a la democracia, su existencia dentro de la dinámica constitucional y del juego democrático parlamentario perdía todo fundamento y el apoyo popular, como efectivamente sucedió.

Acosado por esta nueva realidad que se sumaba a la ya generalizada tensión social, el régimen militar cuya única facultad parecía ser reprimir ensayó un nuevo intento de proyecto político sustituyendo al general Levingston por el general Alejandro Lanusse, quien propuso un "Gran Acuerdo Nacional".

Detrás de este rimbombante y mentiroso enunciado una vez más se escondía la intención de dividir al peronismo. De despojarlo de su contenido nacional y popular a cambio de permitirle participar en las elecciones. La habilidad de Juan Perón y la combatividad de todo el pueblo lograron no obstante arrancarle a la dictadura elecciones libres sin proscripciones con la única salvedad de que el mismo Perón no fuera el candidato presidencial.

Así, tras 18 años de cercenamiento permanente de los derechos constitucionales del pueblo argentino, tras haber transitado éste todas las formas de resistencia y violencia imaginables: legales, seudolegales, extralegales, justas e injustas el pueblo logró que en elecciones libres resultaran elegidos por abrumadora mayoría en 1973 los candidatos peronistas.

El Parlamento volvió a ejercer su poder y la Constitución volvió a ser la carta magna de la legalidad en el país.

El 25 de mayo de 1973 con la asunción de las nuevas autoridades culminó esta nefasta etapa en la historia de nuestra patria que dejó tras de sí una dolorosa secuela de heridas y violencias en la sociedad argentina.

## 5. La vuelta de Perón

### Un breve interregno democrático

El 26 de mayo de 1973 los argentinos suponían que se abría un espacio prolongado de paz en su historia. El mensaje que transmitía Perón desde su exilio en España y lo que deseaba el pueblo peronista era reconstruir una Argentina en paz, democracia y con justicia social. Los acontecimientos posteriores echarían por tierra estas nobles ilusiones.

El regreso de Perón a la Argentina, el siguiente 20 de junio, puso de manifiesto que no todos los peronistas estaban de acuerdo en desarrollar una Argentina en paz. El

enfrentamiento armado entre los Montoneros y la derecha más recalcitrante del peronismo fue el primer augurio de que no todo sería pacífico.

El presidente Cámpora, como era previsible realizó una nueva convocatoria a elecciones dado que Perón, indiscutible líder del movimiento político más importante y numeroso del país había sido vetado como candidato en los comicios anteriores. La fórmula Juan Perón-Isabel Perón ganó las elecciones por la mayoría más abrumadora de la historia argentina.

Sin embargo no faltaba la violencia en esta circunstancia. La derecha del peronismo atacaba a los sectores más progresistas. Los Montoneros —uno de los grupos guerrilleros armados que habían participado en la lucha contra la dictadura de Lanusse— también amenazaban con atacar a la derecha y proseguir con la violencia hasta alcanzar el "socialismo nacional" fórmula con la que pretendían sustituir la doctrina justicialista. Entre tanto, grupos armados de la izquierda trotskista continuaban con sus acciones armadas en contra del nuevo gobierno constitucional. Unos y otros desafiaron abiertamente la joven legalidad en un juego de provocaciones que inevitablemente condujo a la justificación del golpe militar. Lo que se dió en llamar "la guerra contra la subversión".

A la muerte de Juan Perón en julio del siguiente año esta situación se multiplicó. El gobierno de Isabel Perón fue abiertamente atacado con injustificables hechos de violencia terrorista por parte de los guerrilleros armados —de uno u otro color— en nombre de una verdad y representatividad mesiánicas que decían ostentar. Obviamente ninguno de ellos representaba nada legítimo. Su accionar desde el punto de vista constitucional fue delictivo y desde el punto de vista político sirvió a los oscuros intereses de los elementos más reaccionarios de la sociedad argentina, preparando el terreno a una enésima intervención militar.

Por su parte los sectores más reaccionarios del peronismo, liderados por el tristemente célebre José Lopez Rega organizaron la "Triple A" que se dedicó a asesinar impunemente en colaboración con elementos militares y policiales a opositores de su política de corrupción y desaciertos. A su vez esta misma política iría sembrando las bases para la posterior represión que ejercieron las fuerzas armadas a partir de 1976 de forma sistemática y

metódica. Isabel desde el gobierno, en muchos casos cómplice de los abusos de poder policiales y militares, no supo, ni pudo enfrentar la espiral de violencia que día a día cobraba realidad en el país. Tolerante con los abusos paramilitares fue cediendo cada vez más terreno a las fuerzas armadas, de manera que en marzo de 1976 para destituir a éstas sólo necesitaron proponérselo.

La defensa de Isabel Perón resultaba imposible, pero si hubiera debido defenderse el sistema parlamentario y constitucional encarnado por el peronismo que contenía en su seno todas las soluciones para fortalecer las vacilaciones de un Ejecutivo sobrepasado por los hechos.

## 6. El golpe despiadado

En marzo de 1976 cuando diferentes sectores parlamentarios incluido el propio peronismo proponían adelantar la convocatoria electoral ante la creciente debilidad del gobierno de Isabel Perón, una vez más las fuerzas armadas arrasaron la legalidad constitucional. No debe olvidarse en rigor de la verdad que ante la ineptitud del gobierno y la imposibilidad de contener la escalada de violencia que ya arrojaba más de dos muertos diarios, ciertos sectores civiles asistieron con expectativas a la nueva irrupción militar. Expectativas vanas, la dictadura produjo una catástrofe de tal magnitud que el país jamás había conocido ni hubiera podido imaginar. El golpe arrasó todas las instituciones democráticas y sindicales y cercenó todas las libertades y conquistas sociales. Establecidas "las pautas", al pueblo argentino sólo le quedó la posibilidad de someterse a la voluntad militar. Cualquier otra cosa era delito.

Las primeras presidencias de los generales Videla y Viola cargan en su haber con la mayor responsabilidad de una represión hasta entonces desconocida por su grado de violencia y crueldad mientras que le cabe a Galtieri la responsabilidad de la aventura de las Malvinas. Las actuales llamadas a la apertura política por parte del cuarto presidente de la dictadura no lavarán la responsabilidad del conjunto de las fuerzas armadas de haber arrastrado a la Argentina a la peor crisis de toda su historia. Si bien la justificación del golpe militar de 1976 fue "la lucha contra la corrupción y la guerra antsubversiva" los ver-

daderos encubiertos objetivos fueron los mismos que en 1955: hacer desaparecer al peronismo como fenómeno político y entregar el país a la desafortunada ambición de los sectores oligárquicos ligados a la agroexportación y a los intereses de los Estados Unidos.

Sin duda el segundo objetivo lo lograron con creces, los datos económicos resultan ya redundantes: el país está arruinado, la industria nacional en quiebra, el poder adquisitivo de los trabajadores es nulo y el endeudamiento externo desconsolador. Esta vez los militares no se detuvieron en el asalto al poder político sino que asolaron la economía de la Nación, tal como lo testimonian las innumerables denuncias sobre enriquecimientos ilícitos y corrupción en el manejo del erario público.

El otro objetivo, el de terminar con el fenómeno peronista, muy a su pesar no lo han conseguido. Pese a sus contradicciones internas, con sus antagonismos y sin la presencia viva del líder Juan Perón, el peronismo ha seguido demostrando que es la principal fuerza política de nuestro país. Los militares triunfaron sí en la "guerra sucia" contra la subversión, a cambio —claro— del más alto costo político, moral y ético. Miles de ciudadanos implicados o no en la política de violencia fueron sometidos a asesinatos, despiadadas torturas y vejaciones. Su sistemática violación a los más elementales derechos humanos y la política de "desapariciones", ubican a los militares argentinos en la historia mundial junto a los más crueles asesinos y genocidas de la humanidad.

Pese a esta política, las manifestaciones populares se sucedieron. Los trabajadores argentinos, nucleados en la ilegalizada Confederación General del Trabajo comenzaron a exigir la devolución de sus arrebatadas reivindicaciones y paso a paso fueron ganando la calle con sus huelgas y protestas. De manera que pocos días antes de desencadenar la desastrosa guerra de las Malvinas, la dictadura debió responder con balas y nuevos asesinatos al incontenible avance popular. Sin duda el único objetivo cierto que tuvo la guerra de las Malvinas fue desviar la tensión social explosiva que se vivía en el país echando mano de una reivindicación sentida por el conjunto del pueblo por su carácter nacional. Efectivamente el pueblo argentino respaldó la propuesta para verse luego traicionado —una vez más— por estos "salvadores de la pa-

tria" que en la confrontación para defender la integridad territorial de la patria demostraron su habitual incapacidad.

Agotada tras la guerra con el enemigo exterior, la dictadura realizó balance. El peligro "judeo marxista" de la subversión había desaparecido, las arcas de la Nación estaban vacías, obtener créditos en el exterior para seguir malversando los dineros del Estado resultaba imposible y el peronismo vuelve a encontrarse en una etapa de vitalidad. Ante todos estos factores, los militares optaron por abrir el diálogo hacia las fuerzas políticas civiles intentando desde un principio condicionar al máximo la futura acción de las fuerzas democráticas.

Pero sus propias contradicciones, el repudio masivo de todo el pueblo argentino, la digna fortaleza de sus oponentes civiles, y la memoria de las barbaridades que cometieron con el país, sin duda alguna hará que los intentos militares de condicionar el próximo gobierno resulten inútiles.

## RESEÑA SOBRE LOS AUTORES

Carlos Arbelos y Alfredo Roca son escritores y periodistas argentinos que residen en España desde finales de 1974.

Durante estos años han denunciado incansablemente a la dictadura militar que se apoderó del gobierno argentino en 1976. A la vez que han intentado demostrar —de todas las maneras y formas a su alcance— que la valoración general que se tiene en España sobre el peronismo y sus fundadores, Perón y Evita, es errónea, explicitando lo que ellos entienden es el verdadero significado político y social del movimiento antiimperialista de masas más importante de Latinoamérica.

En estos años, también, han seguido y estudiado con suma atención el proceso de transición español y la instauración y consolidación de la democracia en nuestro país. Son colaboradores asiduos de distintos periódicos y revistas de España. Han publicado varios libros y trabajos especializados sobre temas latinoamericanos y la problemática de los refugiados políticos. Uno de sus trabajos publicados en la prensa española sobre el papel de S. M. el Rey Juan Carlos I en Latinoamérica mereció la felicitación de la Casa Real.

Desde hace tres años están trabajando en un ambicioso y monumental proyecto, dar forma escrita a la historia del peronismo mientras concluyen unos relatos sobre su exilio.

## PUBLICACIONES DE LOS MISMOS AUTORES

Argentina: peronismo y democracia (CISPLA, Valencia, 1980)

Los muchachos peronistas (E. Escolar, Editor, Madrid, 1981)

Evita: No me llamaeis fascista (El Cid editor, Barcelona, 1982)

En *Argentina, proceso a la violencia* los especialistas Carlos Arbelos y Alfredo Roca analizan las causas y los antecedentes de la violencia en la historia de este siglo que desemboca en la siniestra dictadura militar que se instauró en aquel país a partir de marzo de 1976. La compleja dinámica de clases y los intereses socioeconómicos casi siempre ligados al capital imperial, son expuestos prolijamente como asimismo las expresiones políticas desde sus proyectos a su representatividad se ven disecados a la luz de los acontecimientos históricos. Lo que desde Europa puede parecer una más de las tantas "dictaduras bananeras" cobra otra dimensión después de este análisis, donde los autores que en gran parte de los hechos también han sido actores, vislumbran y apuntan un camino de paz y esperanza en democracia para su país. Un punto y aparte merece la claridad de exposición de lo que significa el fenómeno peronista, único en el cono sur latinoamericano y en el mundo, en la mayoría de los casos protagonista y decidido fiel de la balanza en los sucesos argentinos desde su irrupción a la vida política a principios de la década de los cuarenta.



Círculo de  
Investigación  
Social  
Para  
Latinoamérica

centro argentino de  
estudios políticos